



Procedimiento N°: A/00327/2014

RESOLUCIÓN: R/01348/2015

En el procedimiento A/00327/2014, instruido por la Agencia Española de Protección de Datos en relación con la propiedad situada en la **A.A.A.)**, vista la denuncia presentada por la **DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL (PUESTO DE ALCAUDETE)**, y en base a los siguientes,

ANTECEDENTES

PRIMERO: Con fecha de 4 de febrero de 2014 tiene entrada en esta Agencia escrito de la Subdelegación del Gobierno de Jaén, dando traslado a la denuncia de la **DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL (PUESTO DE ALCAUDETE)** (en lo sucesivo el denunciante) en el que se comunica una posible infracción a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), motivada por la instalación de una videocámara en la propiedad situada en la **A.A.A.)** y cuyo titular es D. **B.B.B.** (en adelante el denunciado).

La Guardia Civil realiza una inspección física el 17 de noviembre de 2013 a requerimiento de varios vecinos, en la dirección anteriormente citada. Esta propiedad se encuentra vallada perimetralmente, los agentes actuantes observan que en la puerta de entrada/salida, en un poste de gran altura se sitúa una cámara de videovigilancia que debido a su situación y orientación puede estar captando vía pública, teniendo en cuenta que la zona que puede estar siendo captada es una vía de comunicación muy concurrida pues lleva al mayor punto de interés turístico de la localidad, el Nacimiento del Río San Juan. Los agentes actuantes, una vez recorrido el perímetro de la finca denunciada no observan la presencia de ningún cartel informativo que avise de la existencia de una finca videovigilada. Aportan fotografías de la cámara y su situación.

En la denuncia, la Guardia Civil identifica como titular de la propiedad a D. **B.B.B.** **B.B.B.** y señala que fue advertido de las circunstancias anteriormente descritas aproximadamente 9 meses antes de la denuncia, sin que hubiera hecho nada para subsanar estas irregularidades.

SEGUNDO: A la vista de los hechos denunciados, en fase de actuaciones previas, el 30 de abril de 2014, se solicita información al denunciado, este escrito se entrega el 15 de mayo de 2014 tal y como consta en el acuse de recibo expedido por el Servicio de Correos. El 28 de mayo de 2014, el denunciado contesta a esta Agencia, alegando que en la dirección a la que se alude en el escrito (por error se hace referencia al domicilio del denunciado y no la dirección donde se encuentra instalada la cámara denunciada) no hay cámaras.

El 3 de junio de 2014, se vuelve a solicitar información al denunciado, esta vez relativa a la propiedad denunciada. El 3 de julio de 2014, el denunciado contesta a esta Agencia, a través de escrito en el que señala que *"...la vivienda en la que se indica que está instalado el sistema de videovigilancia es una vivienda familiar de la que yo no vengo*

haciendo uso alguno y por tanto desconocía los hechos imputados...que se dirijan los requerimientos de información y la investigación contra el actual usuario de la vivienda que es mi hermano C.C.C.” No aporta ningún documento que acredite que su hermano es el titular del sistema de videovigilancia denunciado.

El 8 de julio de 2014, el funcionario actuante, a través de diligencia hace constar que a pesar de que el denunciado señala que el actual usuario de la vivienda que tiene instalada la cámara de videovigilancia denunciada es su hermano, no facilita ningún dato del mismo ni aporta ningún título válido (justificación jurídica y/o contractual) que vincule a dicho tercero (su hermano) con la vivienda. Sin embargo la Guardia Civil en su denuncia identifica como titular de la vivienda denunciada a **B.B.B.**, incluyendo su DNI y su dirección. Asimismo, los agentes de la Guardia Civil que realizaron la inspección física en la vivienda, refieren que en una ocasión anterior advirtieron al denunciado de las irregularidades del sistema de videovigilancia.

Tal y como establece el artículo 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC): *“Los hechos constatados por funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad, y que se formalicen en documento público observando los requisitos legales pertinentes, tendrán valor probatorio sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan señalar o aportar los propios administrados.”* En virtud de este artículo la denuncia de la Guardia Civil goza de presunción de veracidad, que en este caso concreto no ha sido desvirtuada por el denunciado ya que no ha presentado ningún documento que contradiga el contenido de la misma.

TERCERO: Con fecha 5 de diciembre de 2014, el Director de la Agencia Española de Protección de Datos acordó otorgar audiencia previa al procedimiento de apercibimiento a D. **B.B.B.**, por presunta infracción del artículo 6.1 de la LOPD, tipificada como grave en el artículo 44.3.b) de dicha norma.

CUARTO: Con fechas 12 y 16 de diciembre de 2014 se intentó notificar al denunciado, el acuerdo referido en el antecedente anterior siendo devuelto por el Servicio de Correos con la anotación *“ausente en reparto”*.

Finalmente el acuerdo se entiende notificado desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer en el anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado de 4 de abril de 2015.

QUINTO: Transcurrido el plazo concedido para formular alegaciones al acuerdo de audiencia previa al apercibimiento, no consta que se hayan recibido las mismas.

SEXTO: De las actuaciones practicadas en el presente procedimiento, han quedado acreditados los siguientes:

HECHOS PROBADOS

PRIMERO: En la propiedad situada en la **A.A.A.)**, hay instalado un sistema de videovigilancia con al menos una cámara exterior situada en un poste de gran altura.

SEGUNDO: La Guardia Civil identifica en su denuncia como titular de la propiedad a D. **B.B.B..**

TERCERO: Durante la fase de actuaciones previas de investigación se solicita dos veces información al denunciado en relación con el sistema de videovigilancia denunciado. La primera vez, el 28 de mayo de 2014 el denunciado manifiesta que en su casa no tiene cámaras, por error la solicitud de información se refería a su domicilio habitual y no a la dirección donde se encuentra instalada la cámara denunciada. El 3 de julio de 2014 y en relación con la cámara, el denunciado responde que se trata de una vivienda familiar que está siendo usada por un hermano. No aporta ningún elemento probatorio para acreditar esta circunstancia.

Tampoco realiza alegaciones durante el trámite de audiencia.

CUARTO: La Guardia Civil realizó una inspección física comprobando los agentes la existencia de la cámara situada en un poste metálico instalado en uno de los pilares de la puerta que da acceso a la propiedad. Los agentes actuantes refieren que la cámara está orientada hacia el portón y que por su altura, situación y orientación podría estar captando imágenes de la vía pública. El camino público colindante con la propiedad denunciada es muy concurrido porque lleva a al punto de mayor interés turístico de la localidad.

Los agentes actuantes informan que hablaron con el denunciado al informaron de los hechos que ahora se denuncian.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Es competente para resolver este procedimiento el Director de la Agencia Española de Protección de Datos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37. g) en relación con el artículo 36 de la LOPD.

II

Antes de entrar de lleno en el análisis de la cuestión que aquí nos ocupa, es conveniente hacer hincapié en los requisitos que debe cumplir un sistema de videovigilancia para ser acorde con la normativa de protección de datos. Así pues hay que tener en cuenta lo siguiente:

- Respetar el principio de proporcionalidad.
- Cuando el sistema esté conectado a una central de alarma, únicamente podrá ser instalado por una empresa de seguridad privada que reúna los requisitos contemplados en el artículo 7 de la Ley 23/92 de Seguridad Privada.
- Las videocámaras no podrán captar imágenes de las personas que se encuentren fuera del espacio privado ya que el tratamiento de imágenes en lugares públicos sólo puede ser realizado, salvo que concurra autorización gubernativa, por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

- **Se deberá cumplir el deber de informar a los afectados** en el modo previsto en el artículo 3 de la Instrucción 1/2006, de 8 de noviembre, de la Agencia Española de Protección de Datos, sobre el Tratamiento de Datos Personales con Fines de Vigilancia a través de Sistemas de Cámaras o Videocámaras (Instrucción 1/2006). En concreto:

- “a) Colocar, en las zonas video vigiladas, al menos un distintivo informativo ubicado en lugar suficientemente visible, tanto en espacios abiertos como cerrados y*
- b) Tener a disposición de los/las interesados/as impresos en los que se detalle la información prevista en el artículo 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999.”*

Hay que tener en cuenta que el distintivo del apartado a) debe por un lado avisar de la existencia de una zona videovigilada y por otro debe identificar al responsable del tratamiento o, en caso de grabar imágenes, al responsable del fichero ante el que los interesados podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición reconocidos en la LOPD.

- Salvo en el caso de que el tratamiento consista exclusivamente en la reproducción o emisión de imágenes en tiempo real, cuando se graben imágenes (fuera del ámbito privado) se deberá notificar previamente a esta Agencia la creación del fichero que contenga las imágenes para su inscripción en el Registro General de Protección de Datos.

III

Se imputa a D. **B.B.B.**, titular de la propiedad situada en la **A.A.A.**), como responsable del sistema de videovigilancia instalado en la citada ubicación, la comisión de una infracción del artículo **6.1** de la LOPD, que dispone lo siguiente:

- “1. El tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la Ley disponga otra cosa.*
- 2. No será preciso el consentimiento cuando los datos de carácter personal se recojan para el ejercicio de las funciones propias de las Administraciones Públicas en el ámbito de sus competencias; cuando se refieran a las partes de un contrato o precontrato de una relación negocial, laboral o administrativa y sean necesarios para su mantenimiento o cumplimiento; cuando el tratamiento de los datos tenga por finalidad proteger un interés vital del interesado en los términos del artículo 7, apartado 6, de la presente Ley, o cuando los datos figuren en fuentes accesibles al público y su tratamiento sea necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el responsable del fichero o por el del tercero a quien se comuniquen los datos, siempre que no se vulneren los derechos y libertades fundamentales del interesado.*
- 3. El consentimiento a que se refiere el artículo podrá ser revocado cuando exista causa justificada para ello y no se le atribuyan efectos retroactivos.*
- 4. En los casos en los que no sea necesario el consentimiento del afectado para el tratamiento de los datos de carácter personal, y siempre que una Ley no disponga lo contrario, éste podrá oponerse a su tratamiento cuando existan motivos fundados y legítimos relativos a una concreta situación personal. En tal supuesto,*

el responsable del fichero excluirá del tratamiento los datos relativos al afectado”.

El artículo 3 de la LOPD define datos de carácter personal como *“cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables.”* Se completa dicha definición con lo establecido en el artículo 5.1 f) del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD (RLOPD) que señala que son datos de carácter personal *“cualquier información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente a personas físicas identificadas o identificables”*. Es decir, que las imágenes captadas de personas físicas identificadas o identificables son datos personales.

En relación con la legitimación en el tratamiento de las imágenes, la respuesta se encuentra en el artículo 2 de la Instrucción 1/2006, que establece que: *“1. Sólo será posible el tratamiento de los datos objeto de la presente instrucción, cuando se encuentre amparado por lo dispuesto en el artículo 6.1 y 2 y el artículo 11.1 y 2 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior la instalación de cámaras y videocámaras deberá respetar en todo caso los requisitos exigidos por la legislación vigente en la materia”*.

En el caso que nos ocupa, el sistema de videovigilancia denunciado no cumple con alguno de los requisitos recogidos en el fundamento jurídico anterior, en concreto, la cámara exterior ubicada en un poste a gran altura situado en uno de los pilares del portón que da acceso a la finca, creando una expectativa de captación de imágenes en un espacio para el que no tiene legitimación. Esta circunstancia se recoge en el acta de la inspección física realizada el 17 de noviembre de 2013 por agentes de la Guardia Civil y se deriva de las fotografías incluidas en el acta, en las que se aprecia que la cámara se orienta hacia la entrada de la finca, pudiendo captar a las personas que por allí pasen o estuvieren ya que como refiere la Guardia Civil, por su altura, situación y orientación la cámara podría captar la carretera pública colindante con la finca denunciada que lleva al punto de mayor interés turístico de la localidad.

En el ámbito de la captación de imágenes de la vía pública la ley establece una serie de limitaciones. El artículo 1 de la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en lugares públicos establece: *“La presente Ley regula la utilización por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de videocámaras para grabar imágenes y sonidos en lugares públicos abiertos o cerrados, y su posterior tratamiento, a fin de contribuir a asegurar la convivencia ciudadana, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos, así como de prevenir la comisión de delitos, faltas e infracciones relacionados con la seguridad pública”*.

Esta norma sólo legitima a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, en principio, para el tratamiento de imágenes captadas en la vía pública remitiendo en su artículo 10 al régimen sancionador de la LOPD en caso de incumplimiento de sus preceptos.

El artículo **44.3.b)** de la LOPD considera infracción **grave**:

“Tratar los datos de carácter personal sin recabar el consentimiento de las personas afectadas, cuando el mismo sea necesario conforme a lo dispuesto en

esta Ley y sus disposiciones de desarrollo".

En resumen, de conformidad con la normativa y argumentos expuestos, la captación de imágenes a través de videocámaras, constituye un tratamiento de datos personales, cuyo responsable se identifica, en el presente caso, con el denunciado, toda vez que es quien decide sobre la finalidad, contenido y uso del citado tratamiento.

El denunciado tiene instalado un sistema de videovigilancia con una cámara exterior. Tal y como se indicado en el fundamento anterior, no consta que dicho responsable tenga legitimación para el captación de estas imágenes, realizando por tanto un tratamiento de datos personales sin cumplir con la normativa reguladora de protección de datos.

IV

La disposición final quincuagésima sexta de la Ley 2/2011 de 4 de marzo de Economía Sostenible (BOE 5-3-2011) (LES), ha añadido un nuevo apartado 6 al artículo 45 de la LOPD en lugar del existente hasta su promulgación del siguiente tenor:

"Excepcionalmente el órgano sancionador podrá, previa audiencia de los interesados y atendida la naturaleza de los hechos y la concurrencia significativa de los criterios establecidos en el apartado anterior, no acordar la apertura del procedimiento sancionador, y en su lugar, apercibir al sujeto responsable a fin de que, en el plazo que el órgano sancionador determine, acredite la adopción de las medidas correctoras que en cada caso resultasen pertinentes, siempre que concurran los siguientes presupuestos:

- a) que los hechos fuesen constitutivos de infracción leve o grave conforme a lo dispuesto en esta Ley.*
- b) que el infractor no hubiese sido sancionado o apercibido con anterioridad.*

Si el apercibimiento no fuera atendido en el plazo que el órgano sancionador hubiera determinado procederá la apertura del correspondiente procedimiento sancionador por dicho incumplimiento".

Los criterios a los que alude el nuevo artículo 45.6 de la LOPD, vienen recogidos en el apartado 5 de este mismo artículo, que también ha sido modificado por la Disposición Final Quincuagésima Sexta de la LES, quedando redactado del siguiente modo:

"El órgano sancionador establecerá la cuantía de la sanción aplicando la escala relativa a la clase de infracciones que preceda inmediatamente en gravedad a aquella en que se integra la considerada en el caso de que se trate, en los siguientes supuestos:

- a) Cuando se aprecie una cualificada disminución de la culpabilidad del imputado o de la antijuridicidad del hecho como consecuencia de la concurrencia significativa de varios de los criterios enunciados en el apartado 4 de este artículo.*
- b) Cuando la entidad infractora haya regularizado la situación irregular de forma diligente.*
- c) Cuando pueda apreciarse que la conducta del afectado ha podido inducir a la comisión de la infracción.*

- d) Cuando el infractor haya reconocido espontáneamente su culpabilidad.
e) Cuando se haya producido un proceso de fusión por absorción y la infracción fuese anterior a dicho proceso, no siendo imputable a la entidad absorbente.”

En el presente supuesto se cumplen los requisitos recogidos en los apartados a) y b) del citado artículo 45.6 de la LOPD. Junto a ello se constata una disminución de la culpabilidad del imputado teniendo en cuenta que no consta vinculación de su actividad con la realización de tratamientos de datos de carácter personal, ni que existan beneficios obtenidos como consecuencia de la comisión de la infracción.

De acuerdo con lo señalado,

Por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos,

SE ACUERDA:

1. APERCIBIR (A/00327/2014) a D. **B.B.B.** como titular de la propiedad situada en la **A.A.A.)** y del sistema de videovigilancia allí instalado, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 45.6 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, con relación a la denuncia por infracción del artículo **6.1** de la LOPD, tipificada como **grave** en el artículo **44.3.b)** de la citada Ley Orgánica.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa (artículo 48.2 de la LOPD), y de conformidad con lo establecido en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los interesados podrán interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el Director de la Agencia Española de Protección de Datos en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación de esta resolución, o, directamente recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 25 y en el apartado 5 de la disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación de esta acto, según lo previsto en el artículo 46.1 del referido texto legal.

2.- REQUERIR a D. **B.B.B.** de acuerdo con lo establecido en el apartado 6 del artículo 45 de la Ley 15/1999 para que acredite en el **plazo de un mes** desde este acto de notificación lo siguiente, (abriéndose el expediente de actuaciones previas nº: E/03102/2015 para el control del cumplimiento de lo aquí requerido):

- ✓ **cumpla lo previsto en el artículo 6.1 de la LOPD.** En concreto se insta al denunciado a **justificar** la retirada de la cámara exterior, o bien su reorientación para que capte únicamente el espacio privativo de la vivienda denunciada, sin incluir espacio público. Puede acreditar la adopción de estas medidas, por medio, por ejemplo, de fotografías que evidencien la retirada de la cámara o fotografías que muestren lo que capta la cámara exterior una vez se haya reorientado.
- ✓ **informe a la Agencia Española de Protección de Datos** del cumplimiento de lo requerido en el punto anterior, acreditando dicho cumplimiento (a través por

ejemplo de las fotografías mencionadas en el párrafo anterior).

En caso de no cumplir el presente requerimiento, se procederá a acordar la apertura de un **procedimiento sancionador** pudiendo llegar a imponerse una sanción de 40.001 a 300.000 euros.

3.- NOTIFICAR el presente Acuerdo a D. **B.B.B..**

4.- NOTIFICAR el presente Acuerdo a la **DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL (PUESTO DE ALCAUDETE)**.

De conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 37 de la LOPD, en la redacción dada por el artículo 82 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, la presente Resolución se hará pública, una vez haya sido notificada a los interesados. La publicación se realizará conforme a lo previsto en la Instrucción 1/2004, de 22 de diciembre, de la Agencia Española de Protección de Datos sobre publicación de sus Resoluciones y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 116 del Real Decreto 1720/2007, de 21 diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la LOPD.

José Luis Rodríguez Álvarez
Director de la Agencia Española de Protección de Datos

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, se le informa de que los datos de carácter personal se incluyen en el fichero denominado "Expedientes de la Inspección de Datos", creado por Resolución de 27 de julio de 2001. La finalidad del fichero es la gestión y tramitación de expedientes de la Inspección de Datos. Pueden ser destinatarios de la información los interesados en los procedimientos, los órganos jurisdiccionales, el Ministerio Fiscal, el Defensor del Pueblo, otras Autoridades de Control, las Administraciones Públicas y las Cortes Generales. El afectado podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del tratamiento, la Agencia Española de Protección de Datos, calle Jorge Juan nº 6, 28001 Madrid.